 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO CONTROL POLÍTICO	CÓDIGO: CTP-FO-004
	PRESENTACIÓN PROPOSICIONES	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

**PROPOSICIÓN No. \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_**


**Aprobada en:**

**Tema:**           **Proposición Aditiva al artículo 100. Coordinación de la gestión jurídica pública del Proyecto de acuerdo 368 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL 2024-2027 “BOGOTÁ CAMINA SEGURA”.**


**Facultades:** En ejercicio de las facultades conferidas por la Constitución y la Ley, particularmente las descritas en el Decreto 1421 de 1993 y en el artículo 85 del acuerdo distrital 741 de 2019 de Bogotá, en calidad de Concejal de Bogotá D.C. promuevo la siguiente proposición:

**Modificar el artículo 100 así:**

ORIGINAL	CAMBIOS
<p>Artículo 100. Coordinación de la gestión jurídica pública. En virtud de lo previsto en el Acuerdo Distrital 638 de 2016 y con el objeto de materializar los principios de eficiencia, eficacia seguridad jurídica, transparencia y moralidad pública mediante el ejercicio unificado y coherente de la defensa de los intereses distritales, la recuperación del patrimonio público, la prevención del daño antijurídico y la lucha contra la corrupción administrativa, la acción jurídica distrital en todos sus órdenes se encuentra bajo la coordinación de la Secretaría Jurídica Distrital.</p> <p>La Secretaría Jurídica Distrital como ente rector y cabeza del sector jurídico de Bogotá puede disponer del ejercicio del poder preferente a nivel central, descentralizado y local para dirigir la</p>	<p>Artículo 100. Coordinación de la gestión jurídica pública. En virtud de lo previsto en el Acuerdo Distrital 638 de 2016 y con el objeto de materializar los principios de eficiencia, eficacia seguridad jurídica, transparencia y moralidad pública mediante el ejercicio unificado y coherente de la defensa de los intereses distritales, la recuperación del patrimonio público, la prevención del daño antijurídico y la lucha contra la corrupción administrativa, la acción jurídica distrital en todos sus órdenes se encuentra bajo la coordinación de la Secretaría Jurídica Distrital.</p> <p>La Secretaría Jurídica Distrital como ente rector y cabeza del sector jurídico de Bogotá puede disponer del ejercicio del poder preferente a nivel central, descentralizado y local para dirigir la</p>

 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO CONTROL POLÍTICO	CÓDIGO: CTP-FO-004
	PRESENTACIÓN PROPOSICIONES	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

<p>defensa judicial y extrajudicial de los intereses del distrito capital, para lo cual podrá asumir directamente la representación judicial en los casos que así lo considere. Cuando opere el poder preferente la entidad representada deberá asumir los gastos procesales y poner a disposición de la Secretaría Jurídica Distrital los recursos técnicos, logísticos y profesionales idóneos para llevar a cabo dicha defensa.</p> <p>En todo caso, la responsabilidad patrimonial o de cualquier otro tipo que se derive de la sentencia judicial sólo comprometerá al sector o a la entidad demandada y/o a las que se vinculen al cumplimiento de la obligación judicial a través de acto administrativo de ejecución.</p>	<p>defensa judicial y extrajudicial de los intereses del distrito capital, para lo cual podrá asumir directamente la representación judicial en los casos que así lo considere. Cuando opere el poder preferente la entidad representada deberá asumir los gastos procesales y poner a disposición de la Secretaría Jurídica Distrital los recursos técnicos, logísticos y profesionales idóneos para llevar a cabo dicha defensa.</p> <p>En todo caso, la responsabilidad patrimonial o de cualquier otro tipo que se derive de la sentencia judicial sólo comprometerá al sector o a la entidad demandada y/o a las que se vinculen al cumplimiento de la obligación judicial a través de acto administrativo de ejecución.</p> <p><b>Finalmente se fomentará a las entidades y organismos distritales el uso de los mecanismos alternativos de solución de conflictos con el fin disminuir el número de procesos judiciales y el impacto fiscal de las condenas que se profieran en contra del Distrito, para así garantizar una defensa judicial preventiva que contribuya a la a protección de los intereses del Distrito, y así mismo actualización de formulación de políticas de prevención del daño antijurídico y políticas generales de defensa de los intereses litigiosos.</b></p>
---	---

 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO CONTROL POLÍTICO	CÓDIGO: CTP-FO-004
	PRESENTACIÓN PROPOSICIONES	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

## NORMATIVIDAD


### 1. Constitución:

- **Artículo 1.** Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.
- **Artículo 90.** El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.
- **Artículo 209.** La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.

### 2. Leyes

- Ley 446 de 1998 “Artículo 65-B. Las entidades y organismos de Derecho Público del orden nacional, departamental, distrital y de los municipios capital de departamento y los Entes Descentralizados de estos mismos niveles, deberán integrar un comité de conciliación, conformado por los funcionarios del nivel directivo que se designen y cumplirá las funciones que se le señalen.
- Ley 2220 de 2022, “*Por medio del cual se expide el Estatuto de Conciliación y se dictan otras disposiciones*”, define en el artículo 3º la conciliación como “(...) un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado denominado conciliador, quien, además de proponer fórmulas de arreglo, da fe de la decisión de acuerdo, la cual es obligatoria y definitiva para las partes que

 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO CONTROL POLÍTICO	CÓDIGO: CTP-FO-004
	PRESENTACIÓN PROPOSICIONES	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

*concilian*”, adicionalmente, señaló los parámetros, directrices y orientaciones para el desarrollo de las actividades de conciliación y de los mecanismos de resolución de conflictos.


### 3. Acuerdos:

- Acuerdo Distrital [638](#) de 2016 creó el Sector Administrativo de la Gestión Jurídica integrado por la Secretaría Jurídica Distrital, asignándole la misión de formular, adoptar, ejecutar, liderar, dirigir, coordinar, orientar y evaluar las políticas de gerencia jurídica y de prevención del daño antijurídico para la defensa de los intereses del Distrito Capital.

### 4. Decretos

- **Decreto 597 de 2023:** Por medio del cual se modifica parcialmente y se adiciona el Decreto Distrital 430 de 2018, "Por el cual se adopta el Modelo de Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital
- Decreto Distrital [556](#) de 2021, “Por medio del cual se adopta el Plan Maestro de Acciones Judiciales para la Recuperación del Patrimonio del Distrito Capital”, estableció en el artículo [3](#), la política general, como el conjunto de acciones y estrategias que buscan, entre otros, el uso racional de mecanismos alternativos de solución de conflictos.
- Decreto Distrital [73](#) de 2023, “Por medio del cual se establecen directrices y lineamientos dirigidos a los Comités de Conciliación en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”, reguló diferentes materias, entre ellas, la aplicación de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, prevención del daño antijurídico, gestión judicial y extrajudicial y la efectiva recuperación de recursos públicos.
- Decreto Distrital [430](#) de 2018 se adoptó el Modelo de Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital, concebido como un sistema integral dirigido a la administración, orientación, desarrollo y seguimiento de la gestión jurídica en el ámbito distrital en busca de alcanzar altos estándares de eficiencia y seguridad jurídica que faciliten la toma de decisiones, la protección de los intereses del Distrito Capital y la prevención del daño antijurídico.

### 5. Sentencias.

 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO CONTROL POLÍTICO	CÓDIGO: CTP-FO-004
	PRESENTACIÓN PROPOSICIONES	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

Las sentencias de la Corte Constitucional, C-1195 del 15 de noviembre de 2001, y C-834 del 20 de noviembre de 2013, se precisó que la implementación de prevención del Daño antijurídico permiten el cumplimiento de los siguientes objetivos: (i) facilitar el acceso a la justicia; (ii) proveer una forma más efectiva de solución a los conflictos; (iii) mejorar la capacidad de la comunidad para participar en la resolución de los conflictos; y (iv) aliviar la congestión, la lentitud y los costos de la justicia estatal formal.

## 6. Resoluciones

Resolución 212 de 2023 de la Secretaría Jurídica Distrital, reglamento la mediación de controversias jurídicas que se presenten entre organismos y/o entidades distritales, para que mediante un proceso voluntario puedan llegar a un acuerdo respecto de sus controversias jurídicas y así evitar el inicio de acciones judiciales entre estas.


## JUSTIFICACIÓN

El artículo 90 constitucional dispone que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, por ende la responsabilidad patrimonial del Estado, se circunscriben a la prueba del daño antijurídico, y a la imputabilidad del mismo Estado.

Esta responsabilidad se hace patente cuando se configura un daño, el cual deriva su calificación de antijurídico atendiendo a que el ciudadano que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el daño, tal como ha sido definido por la jurisprudencia del Consejo de Estado. Verificada la ocurrencia de un daño, surge el deber de indemnizar plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad ante las cargas públicas, como medida de resarcimiento que debe ser proporcional al daño sufrido.

Los elementos que sirven de fundamento a la responsabilidad son esencialmente el daño antijurídico y su imputación a la administración entendiendo por tal, el componente que “permite atribuir jurídicamente un daño a un sujeto determinado.

Una vez se determine que se está frente a una obligación que incumbe al Estado, se determina el título en razón del cual se atribuye el daño causado por el agente a la entidad

 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO CONTROL POLÍTICO	CÓDIGO: CTP-FO-004
	PRESENTACIÓN PROPOSICIONES	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

a la cual pertenece, esto es, se define el factor de atribución (la falla del servicio, el riesgo creado, la igualdad de las personas frente a las cargas públicas). Atribuir el daño causado por un agente al servicio del Estado significa que éste se hace responsable de su reparación, pero esta atribución sólo es posible cuando el daño ha tenido vínculo con el servicio. Es decir, que las actuaciones de los funcionarios sólo comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando las mismas tienen algún nexo o vínculo con el servicio público

Las demandas en contra Distrito Capital, se han convertido en un problema público que impacta fiscalmente a la ciudad, por ende, la gestión jurídica pública juega un papel fundamental para lograr disminuir la litigiosidad, ya que el origen de las demandas, en su mayoría nacen de fallas administrativas.

Actualmente, hay más de 13.000 demandas contra Bogotá en temas de reparación directa, acciones de nulidad y de resarcimiento del derecho y controversias contractuales, en donde las pretensiones suman alrededor de 12 billones de pesos.


En Bogotá tienen una cultura de litigio marcada, en donde los ciudadanos optan por demandar al Distrito y no acceder a los mecanismos de conciliación, es por eso que desde la Administración Distrital se debe fomentar la cultura de la conciliación como una medida para descongestionar la justicia y el impacto fiscal que conllevaría a la pérdida de demandas.

El daño antijurídico puede estar latente en la administración, por ello se debe tratar de evitar y prevenir. Es indispensable que cada una de los organismo y entidades del Distrito, tenga un adecuado seguimiento en la cual identifiquen esas falencias que puedan desencadenarse en una falla del servicio y prevenirla a tiempo para evitar el daño.

Es así como las Entidades deben identificar los eventuales hechos que causan daños antijurídicos y adoptar las medidas adecuadas para evitar su ocurrencia o mitigar sus consecuencias que conlleva una responsabilidad del Estado.

Bajo esta premisa desde la Administración Distrital debe fomentar en una disminución de la litigiosidad, con el compromiso permanente de identificar los hechos que generen daños antijurídicos y plantear las alternativas de solución

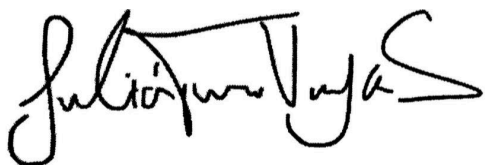
Lo anterior, se puede lograr a través de la actualización de la Política de Prevención del Daño Antijurídico, por parte de los Comités de Conciliación de organismos y entidades distritales.

 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO CONTROL POLÍTICO	CÓDIGO: CTP-FO-004
	PRESENTACIÓN PROPOSICIONES	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

Cada entidad y organismo del Distrito, debe actualizar su política de prevención del daño antijurídico, realizando un estudio integral de su actividad litigiosa, en donde se tenga en cuenta:

- Sentencias o laudos condenatorios.
- Solicitudes de conciliación extrajudicial
- Formulación de la política de prevención del daño antijurídico.
- Reclamaciones administrativas
- Formulación de la política de prevención del daño antijurídico.
- Derechos de petición que puedan anticipar situaciones litigiosas futuras.
- Riesgos jurídicos que puedan llegar a constituir un daño y en consecuencia puedan generar el inicio de la actividad judicial.

Bajo esta premisa, es necesario la actualización de las políticas públicas de prevención del daño antijurídico, que deben estar orientadas hacia una defensa judicial preventiva, para contribuir a la reducción del índice de litigiosidad a partir del mejoramiento de su gestión y la fomentación del uso de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, como la conciliación con el fin disminuir el número de procesos judiciales y el impacto fiscal de las condenas que se profieran en contra del Distrito y la efectiva protección y garantía de los derechos ciudadanos



**JULIÁN FELIPE TRIANA VARGAS**

Concejal de Bogotá  
Partido Alianza Verde